LEY 41 DE 1936

(febrero 26)

por la cual se aprueba una Convención sobre funcionarios diplomáticos, adoptada por la VI Conferencia Panamericana, en La Habana, el 20 de febrero de 1928.

El Congreso de Colombia

decreta:

ARTICULO UNICO. Apruébase la Convención sobre Agentes Diplomáticos, que adoptó la VI Conferencia Panamericana de La Habana, el 20 de febrero de 1928, y que dice:

"Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la VI Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el año de 1928, teniendo en cuenta que una de las materias de mayor importancia en las relaciones internacionales es la que se refiere a los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos y que debe regularse de acuerdo con las condiciones de la vida económica, política e internacional de las naciones;

Comprendiendo que si bien es de desear que esa regulación se efectúe de acuerdo con las nuevas tendencias;

Especificando que los funcionarios diplomáticos no representan en ningún caso la persona del Jefe del Estado, y si su Gobierno, debiendo estar acreditados ante un Gobierno reconocido; y

Reconociendo que como los funcionarios diplomáticos representan sus respectivos Estados, no deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales y que sería de desear que bien el propio funcionario o el Estado representado por él renuncien la inmunidad diplomática cuando se refiera a acciones civiles que no tengan nada que ver con el desempeño de su misión;

No es posible, sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones generales que si bien constituyen una tendencia definida en las relaciones internacionales tropiezan en algunos casos con la arraigada práctica de varios Estados en sentido contrario;

Por lo cual y mientras pueda formularse una regulación más completa de los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos;

Han resuelto celebrar una Convención que comprenda los principios generalmente admitidos por todas las naciones y han nombrado como sus Plenipotenciarios a los señores siguientes:

Perú: Jesús Melquiades Salazar; Víctor Maúrtua; Enrique Castro Oyanguren; Luis Ernesto Denegri.

Uruguay: Jacobo Varela Acevedo; Juan José Amézaga; Leonel Aguirre; Pedro Erasmo Callorda.

Panamá: Ricardo J. Alfaro; Eduardo Chiari.

Ecuador: Gonzalo Zaldumbide; Víctor Zevallos; Colón Eloy Alfaro.

México: Julio García; Fernando González Roa; Salvador Urbina; Aquiles Elorduy.

Salvador: Gustavo Guerrero; Héctor David Castro; Eduardo Alvarez.

Guatemala: Carlos Salazar; Bernardo Alvarado Tello; Luis Beltranena; José Azurdia.

Nicaragua: Carlos Cuadra Pazos; Joaquín Gómez; Máximo H. Zepeda.

Bolivia: José Antezana; Adolfo Costa Du Rels.

Venezuela: Santiago Key Ayala; Francisco Gerardo Yanes; Rafael Angel Arraiz.

Colombia: Enrique Olaya Herrera; Jesús M. Yepes; Roberto Urdaneta Arbeláez; Ricardo Gutiérrez Lee.

Honduras: Fausto Dávila; Mariano Vásquez.

Costa Rica: Ricardo Castro Beeche; J. Rafael Oreamuno; Arturo Tinoco.

Chile: Alejandro Lira; Alejandro Alvarez; Carlos Silva Vildósola; Manuel Bianchi.

Brasil: Raúl Fernández; Lindolfo Collor; Alarico da Silveira; Sampaio Correa; Eduardo Espinola.

Argentina: Honorio Pueyrredón (Later resigned); Laurentino Olascoaga; Felipe A. Espil.

Paraguay: Lisandro Díaz León.

Haití: Fernando Dennis; Charles Ráboul.

República Dominicana: Francisco J. Peynado; Gustavo A. Díaz; Elías Brache; Angel Morales; Tulio M. Cesteros; Ricardo Pérez Alfonseca; Jacinto R. de Castro; Federico C. Alvarez.

Estados Unidos de América: Charles Evans Hughes; Noble Brandon Judah; Henry P. Fletcher; Oscar W. Underwood; Dwight W. Morrow; Morgan J. O'Brien; James Brown Scott; Ray Lyman Wilbur; Leo S. Rowe.

Cuba: Antonio S. de Bustamante; Orestes Ferrara; Enrique Hernández Cartaya; José Manuel Cortina; Aristides Agüero; José B. Alemán; Manuel Márquez Sterling; Fernando Ortiz; Néstor Carbonell; Jesús María Barraqué.

Quienes, después de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1

Disposición General.

Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.

SECCION I

De los Jefes de Misión.

ARTICULO 2

Los funcionarios diplomáticos se dividen en ordinarios y extraordinarios.

Son ordinarios los que representan de manera permanente al Gobierno de un Estado ante el otro.

Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los que se acreditan para representar al Gobierno en conferencias, congresos u otros organismos internacionales.

ARTICULO 3

Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su categoría, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.

La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general así como de las leyes y reglamentos del país ante el cual está acreditado el diplomático.

ARTICULO 4

Además de las funciones señaladas en sus credenciales, los funcionarios ordinarios tienen atribuciones que pueden conferirles las leyes o decretos de los respectivos países. Deberán ejercer sus atribuciones, sin entrar en conflicto con las leyes del país donde estuvieren acreditados.

ARTICULO 5

Todo Estado puede hacerse representar por un solo funcionario ante uno a más Gobiernos.

Varios Estados pueden hacerse representar ante otro por un solo funcionario diplomático.

ARTICULO 6

Los funcionarios diplomáticos autorizados al efecto por sus Gobiernos, pueden, con el consentimiento del Gobierno local, y a solicitud de un Estado no representado ante éste por funcionario ordinario, asumir ante el mis-

mo Gobierno la defensa temporal o accidental de los intereses de dicho Estado.

ARTICULO 7

Los Estados son libres en la elección de sus funcionarios diplomáticos; pero no podrán investir con estas funciones a nacionales del Estado en que la misión debe actuar, sin el consentimiento de éste.

ARTICULO 8

Ningún Estado podrá acreditar sus funcionarios diplomáticos ante los demás Estados, sin previo arreglo con éstos.

Los Estados pueden negarse a admitir un funcionario diplomático de los otros, o, habiéndolos admitido ya, pedir su retiro, sin estar obligados a expresar los motivos de su resolución.

ARTICULO 9

Los funcionarios diplomáticos extraordinarios gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los ordinarios.

SECCION II

Del personal de las misiones.

ARTICULO 10

Cada misión tendrá el personal determinado por su Gobierno.

ARTICULO 11

Cuando los funcionarios diplomáticos se ausenten del lugar donde ejercen sus funciones o se encuentren en la imposibilidad de desempeñarlas, los sustituirán interinamente la persona designada para ese efecto por su Gobierno.

SECCION III

De los deberes de los funcionarios diplomáticos.

ARTICULO 12

Los funcionarios diplomáticos extranjeros no podrán inmiscuirse en la política interna o externa del Estado en que ejercen sus funciones.

ARTICULO 13

Los funcionarios diplomáticos deberán dirigirse en sus comunicaciones oficiales al Ministro de Relaciones Exteriores o Secretario de Estado del país ante el cual están acreditados. Las comunicaciones a las demás autoridades se harán también por medio de dicho Ministro o Secretario.

SECCION IV

De las inmunidades y prerrogativas de los funcionarios diplomáticos.

ARTICULO 14

Los funcionarios diplomáticos serán inviolables en su persona, residencia particular u oficial y bienes. Esta inviolabilidad se extiende:

- a) a todas las clases de funcionarios diplomáticos;
- b) a todo el personal oficial de la misión diplomática;
- c) a los miembros de la respectiva familia que viven bajo el mismo techo;
- d) a los papeles, archivos y correspondencia de la Misión.

ARTICULO 15

Los Estados deberán otorgar a los funcionarios diplomáticos toda clase de facilidades para el ejercicio de sus funciones, y especialmente, para que puedan comunicarse libremente con sus Gobiernos.

ARTICULO 16

Ningún funcionario o agente judicial o administrativo del Estado donde el funcionario diplomático está acreditado podrá entrar en el domicilio de éste o en el local de la misión, sin su consentimiento.

ARTICULO 17

Los funcionarios diplomáticos están obligados a entregar a la autoridad local competente que lo requiera al acusado o condenado por delito común, refugiado en la misión.

ARTICULO 18

Los funcionarios diplomáticos estarán exentos en el Estado donde estuvieren acreditados:

1. De todos los impuestos personales, sean nacionales o locales;
2. De todos los impuestos territoriales sobre el edificio de la misión, cuando pertenezca al Gobierno respectivo;
3. De los derechos de aduana sobre los objetos destinados a uso oficial de la misión, o al uso personal del funcionario diplomático o de su familia.

ARTICULO 19

Los funcionarios diplomáticos están exentos de toda jurisdicción civil o criminal del Estado ante el cual se encuentran acreditados, no pudiendo, salvo el caso en que debidamente autorizados por su Gobierno, renuncien a la inmunidad, ser procesados y juzgados sino por los tribunales de su Estado.

ARTICULO 20

La inmunidad de jurisdicción sobrevive a los funcionarios diplomáticos en cuanto a las acciones que con ella se relacionan. En relación a las otras, sin embargo, no puede ser invocada, sino mientras duren sus funciones.

ARTICULO 21

Las personas que gocen de inmunidad de jurisdicción pueden rehusar comparecer como testigos ante los tribunales territoriales.

ARTICULO 22

Los funcionarios diplomáticos entran en el goce de sus inmunidades desde el momento que pasan la frontera del Estado donde van a servir y dan a conocer su categoría.

Las inmunidades se conservan durante el tiempo que la misión está en suspenso y aun después que termina, por el tiempo que sea necesario para que el funcionario diplomático pueda retirarse con la misión.

ARTICULO 23

Las personas que forman la misión gozarán también de las mismas inmunidades y prerrogativas en los Estados que cruzaren para llegar a su puesto o regresar a su patria, o en el que accidentalmente se encuentren durante el ejercicio de sus funciones, y a cuyo Gobierno hayan dado a conocer su categoría.

ARTICULO 24

En caso de fallecimiento del funcionario diplomático, su familia continuará en el goce de las inmunidades por un plazo razonable, hasta que abandone el Estado donde se encuentra.

SECCION V

Del fin de la misión diplomática.

ARTICULO 25

Los funcionarios diplomáticos cesan en su misión:

1. Por la notificación oficial del Gobierno del funcionario al otro Gobierno de que el diplomático ha cesado en sus funciones.
2. Por la expiración del plazo fijado para el cumplimiento de la misión.
3. Por la solución del asunto si la misión hubiese sido creada por una cuestión determinada.
4. Por la entrega de los pasaportes al funcionario hecha por el Gobierno ante el cual estuviese acreditado.
5. Por la petición de sus pasaportes hecha a éste por el funcionario.

En los casos arriba mencionados se concederá un plazo razonable al funcionario diplomático, al personal oficial de la misión y a las respectivas familias para abandonar el territorio del Estado, siendo deber del Gobierno ante el cual estuvo el funcionario acreditado, cuidar durante ese tiempo porque ninguno de ellos sea molestado ni perjudicado en su persona o bienes.

El fallecimiento o la renuncia del Jefe del Estado, así como el cambio de Gobierno o de régimen político en cualquiera de los dos países, no pondrá fin a la misión de los funcionarios diplomáticos.

ARTICULO 26

La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las partes Contratantes en virtud de acuerdo internacional.

ARTICULO 27

La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios expresados firman la presente Convención, en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Habana, el día 20 de febrero de 1928.

Poder Ejecutivo—Bogotá, 15 de octubre de mil novecientos treinta y cinco.

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso para los fines constitucionales.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jorge SOTO DEL CORRAL

Dada en Bogotá, a catorce de diciembre de mil novecientos treinta y cinco.

El Presidente del Senado, **BENJAMIN BURBANO**—El Presidente de la Cámara de Representantes, **PEDRO CLAVER AGUIRRE**—El Secretario del Senado, **Alain Lemos**—El Secretario de la Cámara de Representantes, **Carlos Samper Sordo**.

Poder Ejecutivo—Bogotá febrero 26 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

E. GONZALEZ PIEDRAHITA

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO

ADJUDICACION

del terreno baldío denominado *Cantares*.

RESOLUCION NUMERO 29

Ministerio de Industrias y Trabajo—Departamento de Baldíos, bosques nacionales y aguas de uso público—Bogotá, diciembre cuatro de mil novecientos treinta y cinco.

El señor Rafael Valencia Z., en memorial de fecha 24 de octubre de 1916, solicita de la Gobernación del Departamento de Caldas que se le adjudique, a título de cultivador y ocupante con ganados, un terreno baldío conocido con el nombre de *Cantares* o *La Palmera*, ubicado en el Municipio de Belalcázar, de este Departamento.

Para respaldar su solicitud, presentó una información sumaria compuesta por las declaraciones de los señores Indalecio Franco, Baudilio Bermúdez, Erasmo García, Gerardo Mejía, Manuel Uribe y Tito Restrepo, vecinos del Municipio de la ubicación del terreno y de buena reputación, rendidas con asistencia del señor Personero Municipal respectivo, ante el señor Juez Municipal de allí, con las cuales se acredita que el terreno denunciado es baldío, que no está destinado a ningún servicio o uso público; que no está ocupado por otros cultivadores o colonos; que dentro de su perímetro no existen minas de ninguna clase en explotación; que no forma parte de resguardos o parcialidades de indígenas; que no existen allí plantaciones naturales de tagua, caucho, balatá, etc., de las que trata el artículo 79 de la Ley 85 de 1920, y en fin, que el terreno no está en ninguna de las circunstancias que pudieran hacerlo inadjudicable, de conformidad con las leyes que reglamentan la materia.

Admitido el denuncia por la Gobernación, se libró el despacho y se remitieron los avisos de que trata el artículo 70 del Código Fiscal al señor Alcalde Municipal

respectivo, y una vez practicadas por este funcionario las diligencias prevenidas en tal disposición, se hizo conocer el denuncia por medio de la publicación del aviso de que se trata, en el número 813 y 814 de *Caldas* (Gaceta Departamental), correspondiente al 2 de marzo de 1917.

En tiempo hábil formularon oposiciones a esta solicitud de adjudicación los señores Heriberto Aguirre, Alejandro Franco y Jesús M. Valencia, por considerar que dentro de los linderos fijados por el peticionario al terreno pretendido, se encierran porciones que les pertenecen. La Gobernación del aludido Departamento, en obediencia a lo que dispone el artículo 74 del Código Fiscal, ordenó el envío de las diligencias al Poder Judicial, para que se ventilara allí la controversia suscitada, y como los oponentes dejaron transcurrir más de un año desde la presentación de la demanda sin adelantar el negocio, el Juzgado del Circuito de Anserma, en providencia de fecha 14 de octubre de 1919, declaró caducada la instancia respecto de las demandas de oposición, y ordenó la remisión de los autos a la Gobernación de Caldas para que allí siguieran su curso legal. Esta providencia fue debidamente notificada a las partes por edicto de fecha 15 de los mismos mes y año.

Transcurrido el término de fijación en lista y oído el concepto favorable del señor Agente del Ministerio Público, se ordenó el levantamiento del respectivo plano, y hecho esto, se enviaron las diligencias al Ministerio para los efectos del artículo 77 del ya citado Código Fiscal.

El señor Ingeniero del Departamento de Baldíos de este Despacho anotó en diversas ocasiones varias irregularidades de carácter técnico, las que fueron posteriormente subsanadas, según lo dice el mismo funcionario en informe de fecha 14 de septiembre próximo pasado.

Obran en el expediente copias debidamente registradas de las siguientes escrituras publicadas:

Número 432, de fecha 6 de julio de 1911, otorgada en la Notaría del Circuito de Anserma, en la que consta que compró al señor Heliodoro Valencia, unas mejoras puestas sobre baldíos nacionales ubicados en el Corregimiento de Virginia, del Municipio de Belalcázar.

Número 33, de fecha 7 de febrero de 1914, de la misma Notaría, por la cual compró al señor Ricardo Aguirre, una finca agrícola ubicada sobre terrenos baldíos ubicados en el mismo paraje de Virginia; y

Número 8, de fecha 12 de enero de 1915, de la misma Notaría, en virtud de la cual compró al señor Emilio Cárdenas, otras mejoras ubicadas en el paraje y Municipio ya nombrados.

Las mejoras compradas por los instrumentos públicos antes relacionados, son las que hoy constituyen la finca existente sobre el terreno que pide en adjudicación.

Expuesto lo anterior, se entra a resolver en el fondo la petición, y para ello es necesario adelantar las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo que estatuyen los artículos 67, ordinal a) del Código Fiscal y el 39 de la Ley 85 de 1920, la persona que ocupe terrenos baldíos con casa de habitación y cultivos, ya sean de pastos artificiales destinados a la ganadería, ya de otra clase, como sementeras y plantaciones permanentes o periódicas, tiene derecho a la adjudicación gratuita de la extensión cultivada y tres tantos más, sin pasar de dos mil quinientas hectáreas en el primer caso, y de mil en el segundo. En el que es objeto del presente estudio aparece debidamente acreditado que el terreno que se pretende en adjudicación, tiene una extensión superficiaria de 270 hectáreas con 2,298 metros cuadrados, de las cuales hay ocupadas con casa de habitación y culti-